

+ Reportaje

Nicaragua: Contra la pobreza y la desigualdad territorial

Entrevista a Alberto Guevara, presidente
del Banco Central de Nicaragua

Pág. 4



Foto Neil Palmer - Ciat

+ En este número

Columna Pág. 2
Alexander Schejtman:
“Debatiendo sobre las políticas
territoriales para un crecimiento
inclusivo y sostenible”

Lanzamiento Libro Pág. 7
“Ciudades Intermedias y
Desarrollo Territorial”

Entrevista Pág. 9
Arlison Favareto
“Crear mercados y diversificar
la producción: Claves para
reducir la pobreza en Brasil”

Nota Pág. 13
Series claves para el
desarrollo territorial:
“Actores Extraterritoriales y
Recursos Naturales: Urge el
Cambio de Reglas”

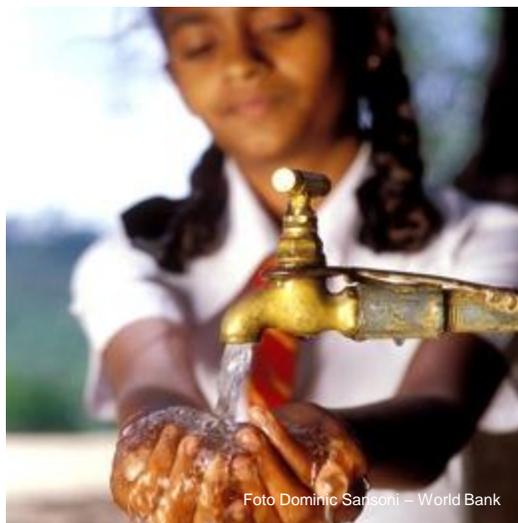


Foto Dominic Sansoni - World Bank



Foto Neil Palmer - Ciat

El Programa Cohesión Territorial para el Desarrollo busca contribuir al cambio institucional y de políticas para crear mayores oportunidades y capacidad en los territorios no metropolitanos para expresar su potencial de desarrollo y que esto redunde en la reducción de las desigualdades territoriales. Es decir, en un país territorialmente cohesionado dará lo mismo el lugar en que se nace y se crece, porque en todos los territorios existirán similares oportunidades y calidad de vida.

El programa, coordinado por Rimisp - Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural, será ejecutado por una red de socios y organizaciones en Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, El Salvador, México, Nicaragua y Perú.

Ellos estudiarán en profundidad alguna de las causas de la desigualdad territorial y los costos de ésta para la sociedad, además de dialogar e interactuar con todos aquellos que tengan la voluntad de materializar soluciones.

www.rimisp.org/ctd

Síguenos en:



Coordinado por:



Financiado por:



Contacto:
Diego Reinoso
Coordinador Comunicaciones
Programa Cohesión Territorial
para el Desarrollo
dreinoso@rimisp.org
+56 2 2236 4557

+ Debatando sobre las políticas territoriales para un crecimiento inclusivo y sostenible

En la literatura existe más de un enfoque sobre la dimensión espacial del desarrollo económico, es decir, sobre el problema de dónde se localiza la actividad económica. Está la propuesta del Banco Mundial, que postula que se deben facilitar los procesos de concentración o aglomeración de la economía en grandes centros urbanos. Hay un segundo enfoque que plantea superar las desigualdades territoriales por la vía de la redistribución desde el centro de activos e ingresos. Finalmente, un tercer enfoque apuesta a procesos basados en movilizar el potencial subutilizado de los territorios, como punto de partida para un crecimiento inclusivo.

El Banco Mundial, en su Informe sobre el Desarrollo Mundial para 2009, sostenía que la aglomeración de actividades económicas en determinadas regiones caracterizadas por mayores densidades de población, infraestructura y servicios (léase ciudades), derivadas de economías crecientes a escala -a través de cierta "causalidad circular"-, sería compatible con la convergencia geográfica en los niveles de bienestar. De ello se derivaba que a largo plazo la mejor forma de corregir las disparidades geográficas es con políticas e instituciones neutras (spatially blind), que fortalezcan la integración de los mercados.

Quienes sostienen la tesis de la salida por el camino de la redistribución de activos e ingresos, tienden a confundir el desarrollo con una serie sucesiva de transferencias de capital e ingresos, en circunstancias que el desarrollo no es una donación de terceros al territorio, sino un proceso cuya implementación es asumida por sus propios actores. Se trata de superar

la confusión entre política social y política de transformación productiva, sin perjuicio de las ventajas que pudiera proveer la primera en términos de reducción de pobreza.

La tercera aproximación sostiene que el crecimiento inclusivo es posible de lograr, en buena parte, "desde los territorios", como lo revelan los casos analizados en el Programa Dinámicas Territoriales Rurales (DTR), coordinado por Rimisp, el cual ha examinado en qué medida el crecimiento con reducción de la pobreza y de la desigualdad han estado o no presentes a lo largo y ancho de América Latina en la última década. El examen de más de 9 mil municipalidades arrojó ciertos resultados que conviene destacar: sólo un 13% de ellas mostró cambios positivos en las tres dimensiones y casi el 60% no experimentó mejoras en la producción o el consumo per cápita. Además de constatar la magnitud de las desigualdades, DTR concluyó que el logro del objetivo universalmente compartido de crecimiento inclusivo y sostenible era una tarea posible, pues más de un tercio de los municipios lograron crecimiento con algún grado de reducción de la pobreza o de la desigualdad.

Según esta aproximación, el rezago territorial sería la expresión de la persistencia de trampas de pobreza y desigualdad que impedirían a los territorios de un país expresar su potencial de desarrollo para alcanzar lo que en la Unión Europea se denomina Cohesión Territorial y lo que Rimisp, con una red de centros asociados, ha asumido como tarea de los próximos años en su Programa Cohesión Territorial para el Desarrollo.



Alexander Schejtman
Investigador Rimisp -
Centro Latinoamericano
para el Desarrollo Rural

La cuestión de las desigualdades territoriales ha ido creciendo en importancia a lo largo de la última década, no sólo en Europa, sino también en aquellos países que han sido capaces de mostrar un crecimiento sostenido en el ingreso per cápita a lo largo de los años, pues han tomado conciencia de que su persistencia amenazaba tanto al propio crecimiento agregado como a su estabilidad económica y social, al exacerbar las tensiones sociales en la pugna distributiva.

En efecto, a partir del año 2000, China ha cambiado el foco de su desarrollo económico-social nacional, desde la zona costera hacia las regiones del interior, de modo de controlar la creciente desigualdad regional. El gobierno central formuló una estrategia de desarrollo del occidente como eje de su décimo plan quinquenal concentrando la acción en seis provincias y cinco territorios autónomos.

Corea, por su parte, introdujo en la última década programas específicos focalizados en regiones seleccionadas por su rezago, con escalas espaciales que trascendían los límites administrativos, obedeciendo a desafíos y potencialidades específicas. Los primeros paquetes estuvieron destinados a incrementar la eficiencia de la política industrial y los siguientes a profundizar las fuentes de crecimiento endógeno, movilizando la innovación y estimulando iniciativas y redes de abajo hacia arriba.

Estados Unidos tiene una larga experiencia en materia de políticas territoriales activas para abordar los problemas de rezago económico y social que van desde la creación de la Tennessee Valley Authority (Roosevelt en 1933) y de la Appalachian Regional Commission (Johnson en 1965), hasta el actual Programa de Innovación Laboral para el Desarrollo Económico regional (WIDER) creado por Bush (i)² en el 2005. Este último programa tiene elementos semejantes a los de la iniciativa europea LIEDER, pues en él la región no la definen las fronteras políticas, sino que las lidera un ente semejante a los grupos de acción local europeos, apunta al fortalecimiento de la identidad local y accede a recursos públicos y privados que le permiten asumir su implementación.

Es interesante destacar que en todas estas experiencias de políticas territoriales la política industrial tuvo siempre un rol protagónico, por lo tanto, no sólo no fueron espacialmente neutras (spatially blind), sino que además fueron sectorialmente selectivas rompiendo con la tendencia centralista de que un modelo de desarrollo calza a todos los espacios.

El desafío es abordar cómo América Latina puede salir de sus bolsones de desigualdad. Nuestra propuesta es promover un desarrollo con cohesión territorial, donde los habitantes en cada territorio tengan similares oportunidades de desarrollo, en función de lo cual se deben impulsar políticas territoriales que fomenten un crecimiento inclusivo y sostenible a partir de sus propias potencialidades. 



¹ <http://www.doleta.gov/wired/>



Alberto Guevara,
Presidente del Banco Central

Nicaragua: Contra la pobreza y la desigualdad territorial

Tras décadas de rezago, Nicaragua logra avances contra la pobreza, fruto de la aplicación de una serie de políticas sociales y económicas, las cuales se ven expresadas en el Plan Nacional de Desarrollo Humano.

El Banco Central de Nicaragua trabaja con el firme propósito de mantener “una sana economía” y siempre en coherencia entre la política monetaria con las políticas sociales enfocadas en la reducción de las brechas.

Nicaragua es un país que está avanzando para reducir la pobreza, aumentar su productividad y ponerse a la par con el resto de las naciones de América Latina en su ritmo de desarrollo socioeconómico.

Es así como el Banco Central de Nicaragua (BCN) está empeñado en aportar a esos objetivos. Al respecto, el economista Alberto Guevara, ex ministro de Hacienda y Crédito Público y actual presidente del BCN, expresó que mantener “una sana economía” traerá beneficios al país, los cuales le permitirán en 2013 liderar el crecimiento en Centroamérica.

Guevara enfatiza la importancia del Banco Central de Nicaragua en su misión de velar por la estabilidad monetaria del país. “Tradicionalmente las políticas monetarias aplicadas por el Banco no analizaban a profundidad cómo estas políticas afectarían a los diversos sectores sociales. Ahora, el Banco está comprometido a que haya una coherencia entre la política monetaria y el resto de políticas del Modelo Cristiano, Socialista y Solidario del Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional (GRUN), especialmente las sociales y cómo contribuimos a la reducción de la pobreza”.

Cobra relevancia en la nación centroamericana trabajar para superar las desigualdades territoriales existentes, las cuales, para algunos economistas, son una condición inevitable del crecimiento económico.

Sobre ello, Guevara expresa que estudios del programa Dinámicas Territoriales Rurales de Rimisp - Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural “han mostrado que eso (las desigualdades territoriales) han sido una tendencia en América Latina, pero hay que distinguir entre el hecho, los elementos factuales y lo que es la política pública”.

“Las dinámicas de mercado llevan a generar esas desigualdades, porque para la disminución de costos tienden a concentrarse donde hay más infraestructura. Es ahí donde entra el papel del Estado y de la política pública, en poner los incentivos para desarrollar las zonas con mayor retraso y facilitar la infraestructura necesaria para que eso suceda. Eso es lo que ha estado haciendo el Gobierno de Nicaragua y lo que tenemos contemplado en el Plan Nacional de Desarrollo Humano, que privilegia una serie de obras que benefician a todo el país, y donde están regiones en las que antes no hubo acceso a políticas públicas, por ejemplo, la Costa Caribe”, destacó.

“Nicaragua tiene una economía sana, porque estamos conscientes de que cualquier desequilibrio macroeconómico lo sufren más profundamente los pobres, quienes mayoritariamente viven en el campo”

¿Las políticas que son determinadas por el Banco Central tienen alguna influencia positiva o negativa en la desigualdad territorial?

“Nicaragua tiene una economía sana, porque estamos conscientes de que cualquier desequilibrio macroeconómico lo sufren más profundamente los pobres, quienes mayoritariamente viven en el campo. Hemos garantizado el control de la inflación, porque eso beneficia a la población más pobre, porque protege su poder adquisitivo y garantiza el normal desenvolvimiento de la economía real”.

El presidente del BCN subraya que, para el Gobierno “es una prioridad lograr una adecuada coherencia entre la estabilidad monetaria y el crecimiento de la economía que contribuya a ejecutar de forma eficiente y efectiva todos los programas socio-productivos impulsados”.

Es claro que cuando hay desigualdades territoriales importantes, los habitantes tienen menos oportunidades de desarrollo y menores niveles de bienestar y que las empresas que están en esos lugares tienen también mayores dificultades o restricciones. Pero, ¿son sólo ellos quienes ‘pierden’ o hay un costo para el conjunto del país asociado a la desigualdad territorial?

“Pierden ellos y perdemos todos si no hay un desarrollo territorial más o menos equilibrado. No se generan los mercados internos necesarios para dinamizar la economía, la demanda agregada no crece lo que debería crecer y, luego, hay efectos sociales como la migración hacia las ciudades o al extranjero que descapitalizan los territorios y al país”.

¿Qué es y qué temáticas aborda el enfoque de trabajo sobre la incidencia de las políticas macroeconómicas a nivel microeconómico que está aplicando el Banco Central de Nicaragua?

“El Banco ahora está desarrollando los instrumentos necesarios para conocer cómo son los mecanismos de transmisión y los efectos de la política macroeconómica a nivel microeconómico.



Por ejemplo, estamos modernizando los sistemas de pago para agilizar las transacciones, hemos actualizado el año de referencia para tener una mejor aproximación a la dinámica económica. Además, hacemos investigación científica para evaluar el impacto de la política económica en la lucha contra la pobreza y otras metas del desarrollo económico y social.

También, estamos desarrollando estudios de campo para tener más información de lo que pasa en la calle y en los territorios, estamos contratando expertos en estudios territoriales y de pobreza, para que nos ayuden con esta labor”.

Al asumir el GRUN, se estableció un dialogo permanente con diferentes sectores del país, para que Nicaragua, independientemente de las condiciones sociales y económicas pudieran contar con oportunidades para superar la pobreza y la desigualdad. Así, se implementó el llamado Plan Nacional de Desarrollo Humano. Al respecto, Guevara explica que éste, “es un plan basado en valores éticos, que tiene precisamente como principal fin la reducción de la pobreza y la desigualdad, a través de 12 grandes bloques de políticas y programas”.

Entre ellos, destaca el vinculado con el crecimiento económico y la estabilidad macroeconómica, donde el Banco Central de Nicaragua juega un papel importante, “preocupados por el desarrollo de las zonas más atrasadas del país, en este caso la Costa Caribe, que tiene su bloque de políticas y programas específicos para esa región. El Plan contempla la concertación con los trabajadores, los productores y el gobierno”.



Foto Neil Palmer - Ciat



Foto Julio Panto – World Bank

“El Plan de Desarrollo Humano prioriza la política social, que es un elemento importante para el desarrollo del bien común y la equidad “

Guevara enfatiza en la necesidad de contar con una “Gestión Pública Participativa y la Democracia Directa, para darle poder a los territorios y para que el pueblo sea protagonista de su propia historia”. En esa línea, explica que “el Plan de Desarrollo Humano prioriza la política social, que es un elemento importante para el desarrollo del bien común y la equidad. Dentro de la estrategia productiva estamos priorizando la economía familiar comunitaria y cooperativa y hemos creado un ministerio para atender esto”.

Agrega que otro bloque de políticas desde esta perspectiva territorial es “el desarrollo de infraestructura, que permitirá el desarrollo de las zonas con mayor rezago del país. Y también estamos preocupados por el tema ambiental, que ocupa otro bloque de políticas”.

Algunos expertos indican que el desarrollo territorial necesita políticas e inversiones “duras”, por ejemplo, en infraestructura de caminos, pero también políticas e inversiones “blandas”, por ejemplo, en lograr más y mejores acuerdos y colaboración entre distintos sectores y actores, o mejorar la calidad de los gobiernos municipales y regionales. ¿Usted comparte esa visión? ¿Qué tipo de inversiones y políticas, duras o blandas, diría que a mediano y largo plazo tienen más impacto sobre el desarrollo territorial?

“Los consensos alcanzados en Nicaragua para el cumplimiento del Plan Nacional de Desarrollo Humano han apostado por políticas que van en la línea de ampliar un poco más el desarrollo de infraestructura, abarcando una amplia gama de políticas: Agua y Saneamiento, Infraestructura Productiva, Turis-

mo, Vivienda, Energía, Transporte y Comunicaciones, lo que serían las políticas duras y aquí tenemos un gran reto y muchas oportunidades.

Por otro lado, tenemos la Economía Familiar, Comunitaria y Cooperativa, la búsqueda de la concertación con los trabajadores y productores, así como la Gestión Pública Participativa. Creemos que este conjunto de políticas continuaran reduciendo la pobreza y la desigualdad en el país, que pasa por los desequilibrios dentro de los territorios y entre los territorios”.

Diversas investigaciones sobre desarrollo territorial y desigualdad han propuesto que los países deberían buscar una mayor ‘cohesión territorial’, entendiendo este concepto como el logro de cierta equidad de oportunidades y capacidades, para que cada territorio pueda expresar su potencial, reduciendo de esta forma las desigualdades territoriales en crecimiento o en inclusión social. Al respecto, el presidente del BCN manifiesta que, “desde las competencias específicas del Banco Central, hemos estado trabajando en asegurar que las condiciones macroeconómicas, particularmente las monetarias, sigan favoreciendo un desarrollo equitativo”.

En esa línea, Guevara añade que “el gabinete económico está desarrollando los lineamientos de políticas que garantizan un avance territorial menos desigual y en todo esto es relevante las políticas de alianzas entre el gobierno nacional y los gobiernos locales, para que las instituciones del Estado se acerquen cada vez más a los territorios y desarrollen acciones que les permita estar más cerca de los beneficiarios y beneficiarias”. 

‘Ciudades Intermedias y Desarrollo Territorial’

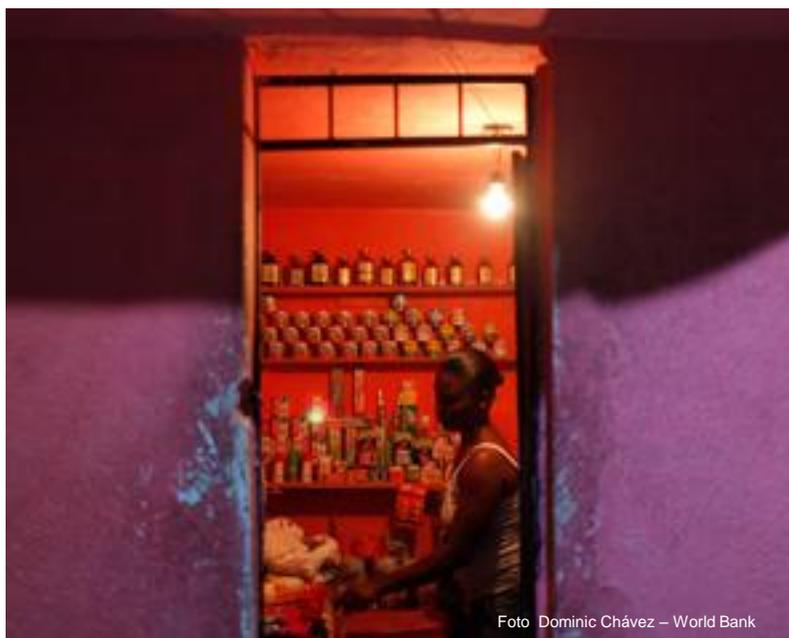
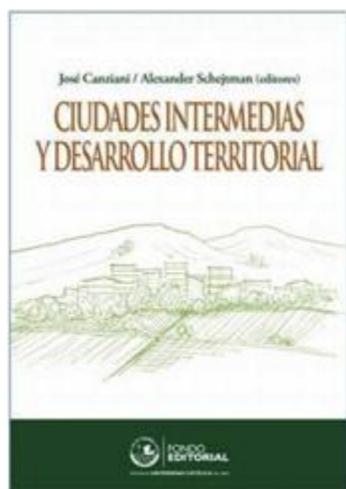


Foto: Dominic Chávez – World Bank

José Canziani y Alexander Schejtman son los editores de este libro, que presenta artículos de destacados especialistas sobre los vínculos urbanos-rurales, desde la perspectiva del desarrollo territorial. La publicación reúne presentaciones de los participantes al “Seminario sobre ciudades intermedias y desarrollo territorial”, organizado por el Departamento de Arquitectura de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) y Rimisp-Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural.



Las últimas décadas han sido testigo de un proceso de cambios significativos en el funcionamiento de las economías de la región. La desregulación de los mercados, la liberalización comercial, la privatización de las empresas públicas y el ajuste fiscal han sido acompañados en muchos países por procesos de descentralización de la gestión pública, elección popular de alcaldes y gobernadores, delegación de competencias a municipios, provincias o estados federales, y han significado transferencias crecientes de recursos y de responsabilidades en materia de educación, salud e incluso de desarrollo a las economías locales.

Se plantea entonces la necesidad de reexaminar las estrategias tradicionales de desarrollo, a modo de avanzar hacia un enfoque de tipo territorial que asuma y profundice las implicancias de la descentralización y considere como marco analítico a los ámbitos creados por los

vínculos entre los núcleos urbanos intermedios y su entorno rural.

Este es el enfoque que José Canziani y Alexander Schejtman han planteado como marco analítico del libro ‘Ciudades intermedias y desarrollo territorial’, el cual está centrado en cómo los vínculos urbano-rurales han llevado a que, de un modo creciente, la preocupación por los problemas del desarrollo urbano no puedan abordarse sino en el contexto de su relación a los espacios rurales de los territorios que comparte, y que la preocupación por el desarrollo rural haya requerido trascender su identificación con el desarrollo agrícola, asumiendo un enfoque territorial que incluya a los núcleos urbanos a los que las actividades primarias están estrechamente vinculadas.

Dadas estas tendencias, y sin perjuicio de reconocer que la urbanización es un proceso mundial irreversible y que tiene

contribuciones positivas al desarrollo nacional, surge la necesidad de asegurar que dicho proceso incluya a los sectores más vulnerables de la sociedad e impone el ineludible desafío de repensar y redefinir las relaciones entre lo urbano y lo rural en América Latina.

El libro 'Ciudades intermedias y desarrollo territorial' tiene el concepto de territorio al centro de su análisis, y es entendido como un espacio a conocer, reconocer, construir o reconstruir, en los que la historia y la identidad tienen un papel muy relevante.

La publicación se compone de tres secciones, que a su vez presentan trabajos de diferentes autores:

1. La primera sección reúne tres trabajos destinados a examinar cuestiones conceptuales del desarrollo territorial en sus dimensiones urbanas y rurales.

El primero de ellos es de Fernando Carrión, quien aborda aspectos sobre el nuevo patrón de urbanización en América Latina que, contextualizando la dinámica poblacional de las últimas décadas, constata una tendencia hacia una pirámide trunca con una contracción de las ciudades medias.

El segundo trabajo, de Sergio Boisier, hace un recorrido por la literatura en torno al concepto de "ciudad región", analizando los problemas involucrados en su gestación y destacando que el desarrollo sustentable es un proceso político que no puede dejarse a las fuerzas espontáneas del mercado.

El tercer trabajo de esta sección es de Alexander Schejtman, quien, formulando el concepto de desarrollo territorial rural como respuesta crítica a las estrategias tradicionales del desarrollo rural, destaca el peso de la matriz agraria sobre las dificultades de generar círculos virtuosos entre la ciudad y el campo.

2. La segunda sección del libro está dedicada a la problemática peruana, encabezada por dos documentos de trabajo conceptuales y críticos de las nociones convencionales de lo rural y lo urbano, y completa cuatro estudios de caso que apuntan a sentar las bases analíticas para el diseño de políticas de desarrollo territorial.

El primer trabajo de esta sección está titulado 'Ciudades

rurales', de Ricardo Vergara, quien plantea una crítica al pensamiento ruralista y caracteriza el proceso de diferenciación urbana en que las ciudades que superan cien mil habitantes crecen a más del doble de las pequeñas, destacando el papel dinamizador de las ciudades y los mecanismos que están detrás de los procesos de transformación productiva de la economía.

El segundo trabajo es de María Isabel Remy, quien también incorpora el concepto de "ciudades rurales" siendo uno de sus hallazgos que la población urbana ya no crece sólo por migración a grandes ciudades, sino por densificación rural.

Los estudios de caso que completan esta sección corresponden a trabajos realizados en la Ciudad de Urcos, Cuzco, Piura, Valle Bajo del Jequetepeque y Cajamarca en Perú.

3. La tercera y última sección incorpora tres trabajos de investigadores europeos.

El primero corresponde a Bernard Declève, quien plantea que el paradigma de red ha pasado a dominar el pensamiento urbano contemporáneo y que la noción de 'red multimodal' tiende a reemplazar el binomio centro-periferia que fuera común como noción organizadora de la escena urbana.

El segundo trabajo es de Alberto Magnaghi y analiza el concepto de biorregión policéntrica para el caso de un proyecto para la Toscana.

El tercer y último trabajo es de Anna Marson, quien recoge una serie de experiencias europeas que muestran alternativas a la tendencia de la pérdida de belleza de los asentamientos contemporáneos y plantea la necesidad de redescubrir la importancia del territorio agrícola, reconociendo su multifuncionalidad potencial.

El libro fue presentado el pasado 23 de abril en el conversatorio 'Desarrollo Territorial Rural y Ciudades Intermedias', organizado por el Centro de Investigación de la Arquitectura y la Ciudad y realizado en la Pontificia Universidad Católica de Perú, en Lima, y con la participación de Alexander Schejtman, quien expuso ante destacados investigadores del área. 🇵🇪





+ Arilson Favareto, profesor de la Universidade Federal do ABC y colaborador del Cebrap

“Crear mercados y diversificar la producción: Claves para reducir la pobreza en Brasil”

En la actualidad, nacer y vivir en las regiones del interior de Brasil significa tener poco acceso a servicios fundamentales para el desarrollo de las capacidades de las personas. Sobre ello, el profesor universitario aborda la necesidad de fijar niveles de bienestar mínimos en los territorios y de optimizar la creación de mercados y diversificar la producción.

En los últimos años, Brasil ha logrado crecimiento económico y una muy fuerte reducción de la pobreza, al tiempo que logra avances importantes en disminuir la desigualdad de ingresos. Pero estos resultados no son homogéneos en todo el territorio y, además, se hace urgente reformar las dinámicas existentes, para mejorar la creación de mercados y lograr la diversificación de la producción, facilitando así el acceso a más y mejores servicios básicos, para potenciar las capacidades de quienes viven fuera de los centros urbanos.

El sociólogo brasileño Arilson Favareto explica en esta entrevista la trascendencia de estos puntos para lograr un avance en la lucha contra las desigualdades territoriales en el país con mayor superficie de América Latina, el sexto más poblado en el mundo y también el sexto en cuanto al tamaño de su economía. Favareto se desempeña actualmente como profesor de la Universidade Federal do ABC (UFABC) y como colaborador del Centro Brasileño de Análisis y Planeamiento (Cebrap).

El especialista menciona que son dos las principales dimensiones donde se manifiesta la desigualdad territorial en Brasil. La primera dimensión enfrenta a los territorios del sur y los del norte-noreste del país. “Dentro de los análisis que hemos hecho como parte

del Programa Cohesión Territorial para el Desarrollo y los que ya veníamos haciendo con Dinámicas Territoriales Rurales, ambos junto a Rimisp, hemos podido constatar que la disminución de la desigualdad fue mucho más fuerte en el sur de Brasil, que en el norte y el noreste del país”, señala.

Una segunda dimensión de desigualdad importante está entre las regiones metropolitanas y no metropolitanas. “Hemos visto una reducción de pobreza y desigualdad en Brasil como un todo, pero esta fue más acentuada en las regiones más urbanizadas al compararlas con las regiones menos urbanizadas. A pesar de todo el progreso que tuvimos en las cifras de indicadores sociales y económicos de Brasil en la década pasada, las de desigualdad permanecen muy fuertes”, agrega.

MERCADOS Y PRODUCCIÓN

En sus publicaciones, Favareto aborda la necesidad de llevar a cabo cambios significativos en el ámbito rural brasileño, para que pueda hacer un mayor aporte al desarrollo económico y social del país. En ese contexto, el sociólogo explica que “lo que conocemos por el Brasil rural de hoy tiene pocas semejanzas con lo que fue el Brasil rural de una o dos generaciones atrás. Entre estas situaciones podemos mencionar, quizás como la más marcada y con la mayor repercusión para los indicadores de desarrollo, el hecho de que en las regiones rurales brasileñas la agricultura aporta cada vez menos a la formación del ingreso de las familias y a la ocupación de trabajo. Décadas atrás se podía explicar la dinámica y el futuro de las regiones rurales por lo que pasaba en la agricultura. Esto es cada vez menos válido. Las personas trabajan cada vez más en otras actividades y dependen cada vez menos de la agricultura, mientras que la mayor parte del ingreso familiar -incluso de familias de agricultores-, vienen mayoritariamente de otras actividades, que no son la agricultura”, agrega.

El académico enfatiza que lo anterior “es tremendamente importante, porque para las regiones rurales el foco siempre ha estado puesto en la implementación de políticas agrícolas. Entonces, reconocer que la dinámica laboral y la dinámica del ingreso pasa cada vez menos por la agricultura, significa decir que es necesario diseñar y promover diversos instrumentos de políticas públicas y no solamente las políticas agrícolas”.

En relación a estos instrumentos necesarios de promover, Favareto precisa que el primer objetivo de las políticas públicas debe ser un fuerte incentivo e impulso a la diversificación de las economías de las regiones del interior, mientras que, en segundo lugar, estaría la generación de una potente inversión en las capacidades humanas fundamentales, para que las personas puedan participar de la vida social y realizar las elecciones de aquello que consideran lo mejor para sí mismos.

Sobre el primer punto, el experto indica que debe realizarse una

intensa política de diversificación de las economías rurales. “Por el desarrollo tecnológico actual, al registrarse una expansión de las actividades agropecuarias, éstas emplean cada vez menos personas. Entonces, la consecuencia es que si no se tienen otras actividades económicas que puedan absorber esa fuerza laboral excedente, esas regiones van a transformarse en bolsones de pobreza o se van a convertir en regiones que expulsan a sus desempleados a otras regiones donde hay otras oportunidades de trabajo. Ninguna de esas dos alternativas es la deseable”.

El experto del Cebrap profundiza en que lo deseable es que las regiones del interior sean territorios “donde hayan posibilidades para que las personas construyan su futuro, independiente de en qué actividad económica lo hagan. Es por ello que es clave generar una política de diversificación de la producción”.

En relación al desarrollo de capacidades humanas, manifiesta que “es fundamental potenciar una inversión con una preocupación intergeneracional. En estas regiones del interior, existe menos disponibilidad de médicos por habitante, tienen indicadores de accesos a fuentes mejoradas de agua peores que en las áreas metropolitanas, existe un déficit de escuelas medias, entre otras situaciones. En estas regiones del interior se tienen un conjunto de indicadores que son importantes para las capacidades humanas que demuestra que estos servicios públicos son ofrecidos de una manera precaria”.

“Hoy en día, la persona que nace en las regiones del interior está condenada a tener un acceso peor a servicios que son fundamentales para el desarrollo de sus capacidades”, subraya Favareto.

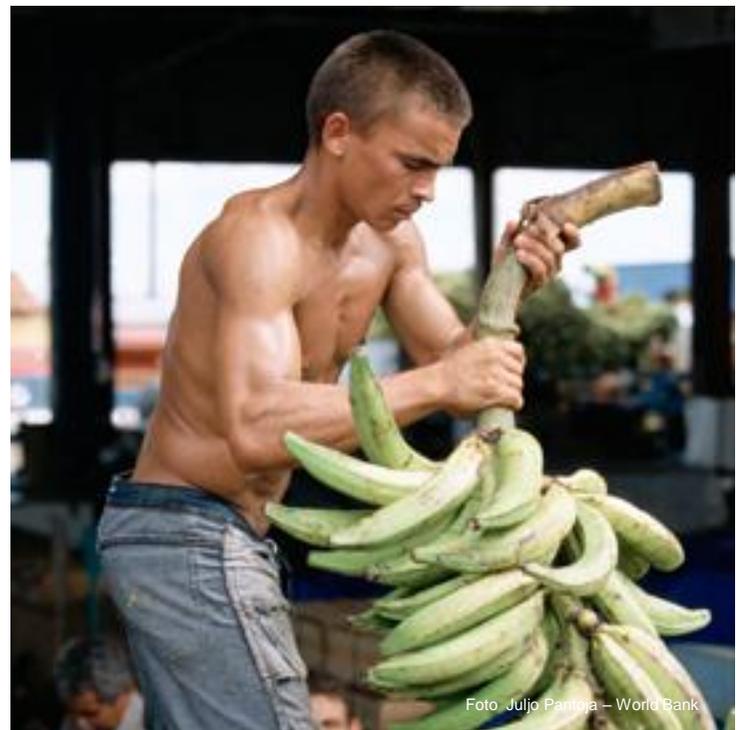


Foto: Julio Panfili - World Bank

Sobre ello, el académico reflexiona: “Sería fundamental que Brasil tuviese una especie de acuerdo sobre cuáles son los niveles mínimos aceptables de bienestar que queremos como sociedad, con el grado de desarrollo que tenemos como país”.

El investigador plantea trabajar algo parecido a los Objetivos de Desarrollo del Milenio de la ONU en escala territorial, en el sentido de verificar cuáles son las metas que se podrían proyectar como indicadores globales deseados en Brasil “y luego decidir cuál es la diferencia aceptable entre lo que se consigue en esos indicadores en las regiones del interior o las más precarias y las regiones ricas del país y, a partir de ahí, hacer las inversiones para ello”.

De igual modo, plantea que Brasil ha tenido un éxito favorable en la última década en la eliminación de la pobreza extrema, pero que “el debate de hoy está en que lo considerado como pobreza extrema es muy bajo y lo que debiéramos hacer es elevar ese indicador. La discusión no debe estar en cuál es el mínimo que las personas deben tener en sus billeteras o si tienen que recibir 70 o 100 reales de ayuda mensual, sino que cuáles son los niveles aceptables de bienestar que se quiere tener en estas regiones, para realizar las inversiones necesarias”.

EL ROL DE LOS PRIVADOS

“En Brasil se cuenta hace algunos años con una política de acceso a mercados para agricultura familiar, para la agricultura más pobre, que son los llamados ‘mercados de compras públicas’. Existe el Programa de Adquisición de Alimentos, el Programa de Nacional de Alimentación Escolar y una serie de otros programas que hacen que una parte de la producción de la pequeña agricultura, de la agricultura familiar, sea comprada por el Estado. Así, se puede garantizar un ingreso a esos agricultores, pero ésto está llegando a su techo, porque el Estado no puede comprar toda la producción de los pequeños productores de Brasil. Entonces existe un enorme espacio que podría ser llenado por la iniciativa privada”.

Con este análisis, Favareto aborda una de las maneras en que el sector privado podría asumir un protagonismo activo en la lucha contra las desigualdades territoriales. “Con el estudio que hicimos para el programa Dinámicas Territoriales Rurales de Rimisp hace dos años atrás en varias regiones, encontramos que hubo esa entrada de las políticas públicas, por ejemplo, incentivando a que los productores retomaran la producción de caprina y de leche a partir de las compras públicas. Pero entonces algunos agricultores decían a modo de broma que ‘el gobierno quiere que yo sea pobre para siempre, por que cuando comienzo a llegar al límite de dejar de ser pobre, ya no compra más mi producción’. Y el Estado hace eso, porque de lo contrario estaría estimulando también la concentración”, dice.

En torno a mecanismos para resolver esta problemática, Favareto propone una suerte de “consorcio” con el sector, priva-

do, para que éste pueda adquirir esa producción excedente, lo cual no se registra en la actualidad, debido a que “el Estado brasileño no ha montado los incentivos para que así sea”.

“Hoy tenemos un volumen muy grande de financiamiento público para las empresas, en particular para el sector agroalimentario, pero no hay contrapartes para eso. Existen varias cosas que se podrían hacer en el sentido de acercar las inversiones privadas a las necesidades sociales de las regiones del interior deprimidas o pobres del Brasil. Una de ellas podría ser que existiesen estrategias empresariales explícitamente enfocadas en regiones deprimidas o para incluir pequeñas y medias empresas o pequeñas propiedades rurales en el circuito de abastecimiento de esas empresas”, ejemplificó.

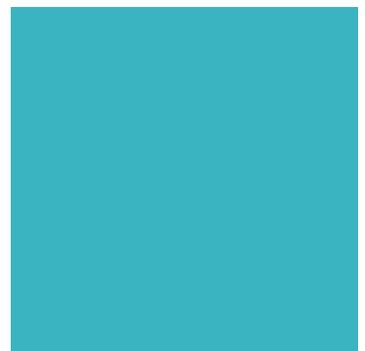
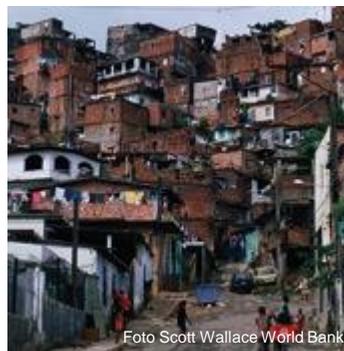
En referencia al impacto de los mercados en las desigualdades territoriales, el sociólogo señala que éste “es enorme, en especial si se considera a los mercados en plural: el mercado de trabajo, el mercado de productos y servicios, entre otros”.

“Una de las razones por la cual las regiones del interior son tan pobres, es justamente porque los mercados de trabajo están controlados por los grandes latifundistas y el mercado de productos y servicios no se abre para la producción de esos pequeños agricultores”, indica.

Por esa razón, agrega, “crear mercados es tremendamente importante como una de las formas para reducir la pobreza”, remarcando sí que no se trata de cualquier tipo de mercado.

“Lo que se requiere es que se organicen mercados sobre reglas que favorezcan mejores condiciones de negociación. En este sentido, incentivar la asociatividad entre los productores es un elemento clave, pero que ha tendido a fallar o a avanzar lentamente”, argumenta.

“Mientras por una parte existe en el sur de Brasil una tradición fuerte de cooperativismo, que viene de la influencia de la inmigración europea -principalmente italiana y alemana-, la tradición de cooperativismo en el noreste y el norte del país ha sido frágil. Esto viene cambiando en los últimos 15 años, pero las cooperativas todavía están muy concentradas en la venta conjunta de productos,. Sería necesario que esas formas de asociación involucrasen un conjunto de actividades, por ejemplo, la adquisición de tecnología, la asistencia técnica y una serie de acciones orientadas a favorecer la producción”, grafica Arilson Favareto.





“Lo deseable es que las regiones del interior sean territorios donde hayan posibilidades para que las personas construyan su futuro, independiente de en qué actividad económica lo hagan”

Usted participa en el proyecto “Políticas de fomento productivo y cohesión territorial” como parte del Programa Cohesión Territorial para el Desarrollo. ¿En qué consiste este proyecto? ¿En qué estará enfocado su trabajo?

“Estamos hablando de la importancia de la diversificación de las políticas rurales. El objetivo de este proyecto es validar en qué medida la política industrial de los países ha contribuido a disminuir la desigualdad territorial, partiendo del supuesto de que para las regiones rurales importa no sólo la política agrícola, sino que también políticas industriales, políticas que favorezcan la diversificación de la estructura económica. ¿Cómo las políticas industriales han sido diseñadas?, ¿cómo han sido implementadas?, ¿esa implementación ha favorecido la disminución de las desigualdades territoriales?, son las preguntas esenciales.

Para ello, analizaremos las políticas industriales en Brasil, Chile y Colombia. En el caso de Brasil, vamos a analizar dos instrumentos de políticas industriales. La primera de ellas son las inversiones del Banco Nacional do Desenvolvimento, BNDES, que es el principal instrumento a través del cual el gobierno ha invertido dinero en la política industrial. El segundo, es la política brasileña de innovación, en particular, las políticas de la Financiadora de Estudos e Projetos, FINEP, una agencia de fomento a la innovación en Brasil.

Lo que queremos saber es cuál ha sido el resultado de estas políticas industriales. Nuestra hipótesis es que la política industrial ha contribuido mucho para apalancar el crecimiento económico, aumentar la producción y la productividad, pero los efectos en términos de empleo y de reducción de la pobreza varían mucho de territorio a territorio. Una de las cosas que pretendemos responder con este programa es saber cuáles son las causas de esa diferenciación en la escala local.

Además estamos trabajando con IMAFLORA, Instituto de Manejo e Certificação Florestal e Agrícola, que es una de las principales organizaciones en Brasil que hace certificación socio ambiental. Hoy, existen en Brasil varias empresas que, para acceder a algunos mercados, tienen que adherir a ciertos protocolos sociales y ambientales que envuelven las condiciones de producción de estas empresas, e IMAFLORA tiene una gran dificultad en cómo transformar las preocupaciones sociales y ambientales en recomendaciones de procedimiento para la actuación de las empresas. Con ellos, trabajaremos en ver cómo las políticas de fomento pueden ayudar a incluir a los más pobres y a generar menores impactos ambientales.

Por último, estamos interesados en trabajar también con organizaciones del sector empresarial como el Instituto Ethos y el GIFE -Grupo de Instituições, Fundações e Empresas, organizaciones creadas por líderes empresariales en Brasil, y cuyo objetivo es aproximar la actividad empresarial a la llamada responsabilidad social y ambiental.

Nuestro propósito en este momento es involucrar a estas instituciones como interlocutores privilegiados de esta investigación. Primero, queremos oír de ellos si los elementos que estamos colocando para la investigación son cosas que hacen sentido para el mundo de los gestores de los bancos, las agencias y el mundo empresarial y, eventualmente, revisar éstas, para incorporar las preocupaciones de ellos. Segundo, queremos ir compartiendo con estas organizaciones los resultados a los que vamos llegando y así aproximar esas necesidades a estos gestores y líderes empresariales.

Actores Extraterritoriales y Recursos Naturales: Urge el Cambio de Reglas

Investigaciones relacionadas con las brechas de desigualdades de América Latina muestran que, en muchas ocasiones, el mal uso del patrimonio ambiental de los territorios está íntimamente vinculado a la acción de actores extraterritoriales poderosos, quienes prefieren agotar el recurso a realizar cambios, para no alterar sus grados de poder ni la distribución de ganancias y pérdidas de su dinámica económica.

Expertos sugieren enfrentar estos hechos con un cambio de las reglas que permitieron el inicio de la dinámica, en combinación con la acción colectiva para convocar a la mayor cantidad posible de actores territoriales e influir sobre actores privados y/o estatales.



Foto Neil Palmer - Ciat



Foto Stephan Bachenheimer – World Bank



Desde 2007 a 2012, Rimisp-Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural, en conjunto con 52 organizaciones socias en 11 países de América Latina, llevó a cabo el Programa Dinámicas Territoriales Rurales (DTR), contando con el apoyo financiero del International Development Research Center (IDRC, Canadá), el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA) y New Zealand Aid Programme (NZAP).

El documento ‘Desarrollo territorial, ambiente y coaliciones extraterritoriales’, explica cómo ciertos territorios rurales de América Latina que han logrado combinar crecimiento económico, reducción de la pobreza y de la desigualdad y cómo la presencia de “actores extraterritoriales” apoyan, facilitan o viabilizan aquellas dinámicas económicas territoriales que sirven para conseguir esos resultados.

El equipo de investigadores trabajó bajo la definición de **actores extraterritoriales**, como “**aquellos grupos, empresas u organizaciones, que no son endógenos al espacio geográfico en donde operan, en el sentido de que no surgen desde dicho territorio, ni tienen identidades basadas en ellos. Pueden tener variadas características de escala (influencia nacional, internacional o global), de finalidad (organizaciones privadas, públicas, ciudadanas) y del modo de inserción en las dinámicas del territorio (enclaves o encadenamientos locales)**”.

El papel de estos actores extraterritoriales varía enormemente. En algunos casos, usan recursos que los actores locales no podrían aprovechar sin participación externa, activando así el “motor” de la dinámica económica del territorio. En otros casos, son decisivos en crear condiciones o activos básicos para el despliegue de la dinámica. Por ejemplo, construyen infraestructura vial que conecta el territorio con los mercados, o habilitan nexos comerciales sin los cuales la dinámica territorial no podría emerger.

El documento plantea cinco mensajes claves referidos a la importancia y efectos de la presencia de actores que no pertenecen a los territorios:

Los actores extraterritoriales se han convertido en muchos lugares de América Latina, en factores determinantes de las dinámicas territoriales recientes. Por lo general, estos actores tienen acceso a un conjunto de recursos económicos, políticos, sociales y culturales de los que los actores locales generalmente carecen. Su presencia introduce nuevas y a veces grandes asimetrías de poder en los territorios en donde operan.

Las principales instituciones ambientales en los territorios, que nacieron para permitir y regular el acceso de los actores extraterritoriales a recursos naturales clave, son el resultado de la decisión de la coalición dominante.

El inicio de las dinámicas territoriales marcadas por la presencia de poderosos actores extraterritoriales, por lo general se basó en la creación de instituciones ambientales que permitieron el acceso a recursos naturales clave.

Esas mismas instituciones no regularon o regularon muy débilmente la forma de aprovechamiento de dichos recursos, que fue dejada a la libre voluntad o a la “auto-regulación” del actor beneficiario de tal acceso. Esas instituciones ambientales iniciales fueron, por lo general, el resultado del acuerdo entre actores extraterritoriales poderosos (empresas privadas) y el Estado central respectivo, sin ninguna participación de los actores locales, que en algunos casos ni siquiera fueron informados de las nuevas reglas.

Una primera vía para el cambio de las instituciones ambientales clave del territorio, es que los actores se vean forzados al cambio por una crisis que no quieren, pero que no saben cómo evitar. Cuando las reglas de acceso y aprovechamiento del patrimonio ambiental del territorio conducen al agotamiento de un recurso natural clave para la reproducción de la propia dinámica económica, los actores, incluso aquellos poderosos, pueden destruir las bases naturales de su propia actividad. No está en su interés de mediano y



Foto Rimisp

largo plazo hacerlo y, aunque muchas veces son plenamente conscientes del problema, por diferentes motivos no logran actuar para resolverlo.

En este caso el cambio institucional proviene de “presiones estructurales”, que en cierto modo obligan a hacerlo, incluso en contra de la inacción o de la voluntad de los actores involucrados.

Una segunda vía de cambio en las instituciones ambientales es la presencia de la acción colectiva, dentro o fuera de la coalición dominante, que obliga a considerar intereses sociales más amplios o diferentes elementos del patrimonio ambiental del territorio. A veces los actores deciden actuar antes o incluso en ausencia de una crisis ambiental. Para que la acción colectiva tenga efectos sobre la institucionalidad ambiental clave del territorio y sus dinámicas, es necesario que influya decisivamente sobre actores de la coalición dominante, sean éstos la empresa privada o el Estado.

Los actores que deciden actuar deben entonces contar con alianzas sociales y con los suficientes recursos políticos o simbólicos, entre los que se cuentan discursos articulados y creíbles para modificar la conducta de la coalición dominante. Por lo general, estos actores disfrutan (o perciben disfrutar) menos ventajas económicas o políticas de la dinámica económica territorial y reciben (o perciben recibir) mayores perjuicios. De igual modo, intervienen también actores locales o extraterritoriales, cuyo objetivo principal es la protección del ambiente.

Una política pública ambientalmente sustentable debe considerar los intereses sociales y las percepciones ambientales de la mayor cantidad posible de actores territoriales, pues sólo así tendrá oportunidad de evitar crisis ambientales irreparables o costosas. Muchas veces el Estado actúa como estrecho aliado de los actores extraterritoriales y forma parte de la coalición dominante. Esto ocurre, porque se considera beneficiario y socio de la dinámica económica territorial. Es vital, y así ha ocurrido en algunos lugares, que su actuación favorezca tanto la expresión de la voz como la acción colectiva de quienes pueden estar siendo perjudicados social y ambientalmente por la dinámica territorial.

Una política pública coherente y sistemática que tome en serio y contribuya a fortalecer e integrar un mayor número de actores y un más amplio rango de preocupaciones ambientales y distributivas, puede llegar a ser un factor decisivo para evitar crisis ambientales y conseguir una acción colectiva preventiva que transforme las instituciones ambientales del territorio.

No siempre es cierto que un patrimonio natural mayor, resultará en dinámicas de crecimiento con inclusión social y sustentabilidad ambiental. De hecho, es probable que instituciones ambientales más estrictas impliquen un crecimiento económico más moderado, pero, al mismo tiempo, una distribución más amplia y equitativa de los beneficios económicos de la dinámica. Esto ocurre, porque el control del uso y las limitaciones en el acceso al patrimonio ambiental,

funcionan como restricciones del manejo económico en el corto plazo, mientras que muchos de sus beneficios se consiguen y se valoran en el mediano y el largo plazo, algo que la economía convencional y muchos de los actores tienden a subvalorar.

La investigación ‘Desarrollo territorial, ambiente y coaliciones extraterritoriales’ muestra ejemplos que grafican claramente las dinámicas de actores extraterritoriales en la explotación de recursos naturales, entre ellos: las salmoneras de Chiloé en Chile y la explotación del gas en Bolivia.

En el primer caso, la coalición salmonera de Chiloé Central es identificada como el eje articulador del desarrollo del territorio a partir de inicios de los años 1990. Su presencia ha significado un cambio radical en las actividades tradicionales de un territorio, hasta entonces caracterizado por una economía de subsistencia centrada en la agricultura y la pesca artesanal. La coalición dominante está conformada por empresas del cluster del salmón (244 empresas), instituciones del Estado central y autoridades políticas.

En Bolivia, a finales de la década de 1990, con el descubrimiento de nuevos campos de gas y producto de una agresiva política de exploración motivada por una nueva modalidad de fomento a la inversión extranjera (conocida como “Capitalización”), el combustible se convierte en el eje económico más dinámico del país. En 2000, el departamento de Tarija poseía el 15% en la producción de gas natural, mientras que en 2005 ese porcentaje escalaría a un 60% y en 2011 la producción promedio alcanzó el 70%. La coalición dominante está constituida por la empresa petrolera Repsol y el gobierno central que alienta sus inversiones. 



Foto: Curt Carnemark – World Bank

<http://www.rimisp.org/contenido/actores-extraterritoriales-y-desarrollo-rural/>

El proyecto ‘Desarrollo territorial, ambiente y coaliciones extraterritoriales’, se llevó a cabo en Ecuador (Universidad Andina Simón Bolívar, sede Ecuador), Brasil (Universidad Federal de Santa Catarina – UFSC en asociación con CIRAD Francia), Bolivia (Centro de Estudios Regionales de Tarija-CERDET) y Chile (Rimisp). Equipo:

Pablo Ospina, Magíster en Antropología de la Universidad Iberoamericana, México D.F, Licenciado en Historia por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, Quito. Posee un Diploma Superior en Estudios Amazónicos de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Sede Ecuador, Quito. Es docente e investigador de la Universidad Andina Simón Bolívar, sede Ecuador (UASB-E).

Eduardo Ramírez, candidato a PhD por la universidad de Nijmegen, Holanda. Magíster en Economía Agraria de la Universidad Católica de Chile e Ingeniero Agrónomo de la Universidad Austral de Chile. Fue Secretario Ejecutivo del Grupo Chorlaví y desde enero de 2008 se encuentra vinculado al Programa de Dinámicas Territoriales de Rimisp.

Anthony Bebbington, Director de la Escuela de Posgrado de Geografía e Higgins Profesor de Medio Ambiente y Sociedad de Clark University, EEUU. Es también docente asociado de la Universidad de Manchester, Inglaterra e investigador asociado del Centro Peruano de Estudios Sociales. Es miembro de la Academia de Ciencias Nacionales de los EEUU.

Patric Hollenstein, estudió Ciencias Políticas en la Universidad San Galo, Suiza. Posteriormente realizó una maestría en Estudios Políticos en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, sede Ecuador. En la actualidad trabaja como asistente de investigación para la Universidad Andina Simón Bolívar, sede Ecuador, en temas de sociología económica.

Ilana Nussbaum, es socióloga de la Pontificia Universidad Católica de Chile, posteriormente realizó un diplomado en Ciencias de la Religión en la Universidad de Chile. En su vida laboral se ha desempeñado en temas ligados a la gestión, mejoramiento y evaluación de la educación en Chile, además de investigaciones en ruralidad y desarrollo sostenible en diversos centros de estudio y universidades, realizando apoyo investigativo tanto a nivel teórico como aplicado. Se desempeñó como asistente de investigación en Rimisp, Santiago.

Agenda

Si usted desea anunciar actividades vinculadas con los temas de este boletín, publicaciones afines a temas de desarrollo y cohesión territorial y/o temáticas relacionadas a las mismas, escríbanos a:

ctd@rimisp.org

Rimisp-Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural se reserva el derecho de seleccionar los eventos, publicaciones y/o documentos a publicar en este boletín.



Diplomado Semi-Virtual de Cohesión Territorial para el Desarrollo

El próximo 21 de mayo se inicia el diplomado Semi-Virtual de Cohesión Territorial para el Desarrollo, coordinado por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, FLACSO-Chile y Rimisp-Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural.

El diplomado aborda los factores estructurales, sociales y político-institucionales que pueden contribuir a la cohesión territorial, y propone una nueva perspectiva de lo que se entiende por territorio y las problemáticas asociadas a temas de pobreza, desigualdad, ruralidad, entre otras.

El programa está dirigido a profesionales de todas las áreas que trabajen en temáticas relacionadas con políticas sociales, desarrollo rural y desigualdad. Se estructura en nueve módulos; ocho de ellos virtuales, en tanto que el módulo final es presencial y se hará en Santiago, Chile. Hay también un módulo de evaluación que permitirá al estudiante dar término a su trabajo de diplomado.

Más información en:

<http://www.rimisp.org/noticia/diplomado-cohesion-territorial/>



Seminario Sepia XV - Chachapoyas 2013

El Seminario Permanente de Investigación Agraria (SEPIA), junto al Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana-Amazonas (IIAP) y la Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza, organizan el Seminario Biental SEPIA XV en la ciudad peruana de Chachapoyas del 20 al 22 de agosto del 2013.

Los ejes temáticos de la actividad serán: Estrategias de vida, cambios en la tenencia de la tierra y cambios demográficos en el mundo rural; Servicios ambientales y desarrollo rural sostenible; y Políticas de inversión pública y su impacto sobre el desarrollo rural.

En el seminario se presentarán las ponencias de balance de los ejes temáticos en sesiones plenarias cada día, así como las ponencias del mismo tema que las acompañan, las cuales estarán distribuidas en mesas paralelas de presentación y debate.

Mayores informaciones en:

http://www.sepia.org.pe/seminario_sepia_xv_chachapoyas_2013.html